

C.A. de Concepción

dcs

Concepción, veinte de noviembre de dos mil veintitrés.

Considerando:

Del fallo en alzada se eliminan los motivos 7, 11, 15, 16 y 19 y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que en los autos ordinarios sobre cobro de pesos Rol C-5013-2019, seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, las demandadas dedujeron recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada el nueve de septiembre de dos mil veintidós, que en lo pertinente al recurso entablado, rechazó las excepciones de cosa juzgada y prescripción, acogiendo la demanda y condenando a las demandadas a pagar las sumas que se indican, con costas.

Segundo: Que el apelante solicita la revocación del fallo en alzada y que esta Corte declare que la sentencia arbitral que sirve de sustento a las pretensiones del actor carece de validez; que se acoja la excepción de cosa juzgada y de prescripción de las acciones de cobro emanadas del laudo arbitral, negando lugar a la demanda. En subsidio de lo anterior, y para el evento que se estime que las prestaciones reclamadas se hicieron exigibles el 13 de octubre de 2014, pide que se acoja la excepción de prescripción respecto a la Clínica de la Mujer Sanatorio Alemán S.A.

Argumenta que la sentencia arbitral que el demandante invoca como fuente de la obligación cuyo cumplimiento pretende carece de validez porque no fue autorizada por ningún ministro de fe ni tampoco por dos testigos, como exige el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil. Añade que el actor dedujo demanda ejecutiva en los autos Rol C-5087-2015, los que terminaron por sentencia definitiva de 29 de enero de 2019, que acogió la excepción de falta de requisitos del título, la que produce el efecto de cosa juzgada en este juicio. Finalmente, considera que el juez aquo incurrió en un error al rechazar la excepción de prescripción, fundado en que el laudo arbitral



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MTCGXJFQNV

se hizo exigible el 10 de septiembre de 2015, cuando se certificó su ejecutoriedad, en circunstancias que dicha certificación no cumple las exigencias legales y además no puede modificar la fecha en que la prestación se hizo exigible.

Tercero: Que para una adecuada comprensión del asunto discutido, resulta necesario tener presente las siguientes circunstancias, que constan en la carpeta electrónica y en los expedientes tenidos a la vista:

a.- Por sentencia arbitral de 31 de enero de 2014 se acogió parcialmente la demanda deducida por la Sociedad Topelberg Seguridad Limitada, condenando a la Corporación Sanatorio Alemán a pagar la suma de \$8.174.648, más el IVA por los servicios prestados y la suma de \$16.349.296 por concepto de dos meses de desahucio. Asimismo, la Clínica de la Mujer Sanatorio Alemán S.A. fue condenada a pagar \$5.649.877 más el IVA correspondiente y \$11.299.754 por dos meses de desahucio. Este laudo arbitral fue notificado a ambas partes el 14 de marzo de 2014;

b.- Que contra dicha sentencia las demandadas dedujeron recurso de apelación, el que fue declarado inadmisibile, por sentencia de esta Corte de Apelaciones, de 13 de octubre de 2014;

c.- Que por demanda ejecutiva presentada el 17 de julio de 2015, la sociedad Topelberg Seguridad Limitada exigió a ambas demandadas el pago de la suma total de \$44.082441, invocando como título ejecutivo el laudo arbitral de 31 de enero de 2014, lo que dio origen a los autos Rol C-5087-2015, seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, dictándose sentencia definitiva el 29 de enero de 2019, por la que se acogió la excepción contemplada en el numeral 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, y consecuentemente se rechazó la demanda ejecutiva;

4.-Que la sociedad Topelberg Seguridad Limitada, el 8 de noviembre de 2016 dedujo demanda ejecutiva contra la Corporación Sanatorio Alemán y la Clínica De La Mujer Sanatorio Alemán, por las



sumas indicadas en el laudo arbitral, el que nuevamente fue invocado como título ejecutivo, dando origen a los autos Rol C-6948-2016, del Segundo Juzgado Civil de Concepción, en los que se dictó sentencia definitiva de 13 de febrero de 2018, por la que se acogió la excepción de litis pendencia.

Cuarto: Que realizadas estas precisiones fácticas, en primer lugar cabe hacerse cargo de la alegación de falta de validez del laudo arbitral en razón de carecer de autorización de ministro de fe, a cuyo respecto cabe consignar que efectivamente y según consta de los autos arbitrales traídos a la vista, la sentencia dictada por el árbitro don Patricio Mella Cabrera aparece suscrita sólo por éste, lo que carece absolutamente de trascendencia en esta causa, desde que dicha exigencia formal sólo tiene por objeto dar fe de que la sentencia ha sido dictada por quien aparece en ella; aspecto que no ha sido controvertido de manera alguna por las demandadas. A mayor abundamiento y atendida la naturaleza de la acción deducida, dicha pretensión anulatoria debe ser ejercida en el procedimiento que corresponde.

Quinto: Que en lo que concierne a la excepción de cosa juzgada, lo primero que llama la atención es el confuso planteamiento de las demandadas, las que en su escrito de contestación de la demanda efectúan una somera referencia a las causas ejecutivas Rol N° C-5087-2015 y Rol C-6948-2016, ambas tramitadas ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, afirmando que la sentencia dictada en los autos Rol C-5087-2015, que acogió la excepción contemplada en el artículo 464 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, “produce cosa juzgada en este juicio ordinario”.

Así las cosas, no se comprenden las razones por las cuales se hace alusión al proceso Rol C-6948-2016 y en lo que concierne a la causa C-5087-2015, no existe absolutamente ningún desarrollo de la excepción en comento, lo que bastaría para su rechazo.



Que sin perjuicio de lo anterior, dicha excepción igualmente debe ser desechada desde que la sentencia que le sirve de sustento ha sido dictada en un procedimiento ejecutivo en el que se invocó como título de la ejecución el laudo arbitral de 31 de enero de 2014 y en los autos Rol C-5013-2019, se persigue, en sede declarativa, el pago de obligaciones emanadas de sendos contratos de prestación de servicios de seguridad, las que fueron reconocidas por el juez árbitro en el laudo tantas veces citado; de manera que la causa de pedir en ambos procesos es diferente.

Sexto: Que finalmente y respecto a la excepción de prescripción, previo a su examen y resolución, es menester recordar que la competencia de esta Corte se encuentra limitada no sólo por las peticiones concretas que formulan las partes, sino que también por los fundamentos fácticos y jurídicos en que éstas las sustentan. En lo pertinente, las demandadas desarrollan sus alegaciones sobre la base de entender que la acción ejecutiva emanada del laudo arbitral se convirtió en ordinaria, y que en dicho carácter ha sido ejercida en el cobro de pesos que se examina, de manera que sobre esta base argumental se decidirá el asunto planteado.

Séptimo: Que según la demandada, siendo el laudo arbitral una resolución susceptible únicamente del recurso de casación, el que no fue deducido, y habiendo sido notificado a las partes el 14 de marzo de 2014, dicho laudo adquirió firmeza el día 25 del mismo mes y año, una vez que transcurrió el plazo para interponer el recurso de casación; y no el 10 de septiembre de 2015 como resolvió el juez aquo, al fijar la ejecutoriedad en la fecha en que se certificó dicha circunstancia, una vez que la causa fue devuelta por esta Corte de Apelaciones, luego de estimar inadmisibile el recurso de apelación que fue interpuesto por las demandadas.

Octavo: Que a este respecto, cabe recordar que el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil prescribe que “Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si



no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más trámites”.

Noveno: Que sin perjuicio de la norma antes transcrita, lo cierto es que la alegación de la demandada violenta profundamente el principio de buena fe procesal e implica un aprovechamiento que no puede tener acogida. En efecto, del mérito de los antecedentes consta que ha sido la propia parte demandada la que dedujo el recurso de apelación que casi siete meses después fue declarado inadmisibile por este Tribunal de Alzada, insistiendo dicho litigante en la procedencia de tal arbitrio recursivo durante la tramitación del citado recurso, al solicitar el rechazo de una petición de inadmisibilidad presentada por la actora y apelada.

A mayor abundamiento y pese a que el laudo arbitral que declara la existencia de las obligaciones dinerarias de la demandada está fechado el 31 de enero de 2014, luego de los numerosos intentos de la demandante por obtener el cumplimiento de tales obligaciones, la demandada se mantiene en mora y pretende además, tal como se dijo, aprovecharse de su propio error al deducir un recurso de apelación improcedente, lo que provocó una larga paralización de las acciones de la acreedora para obtener el pago de las obligaciones pendientes.

Así las cosas y conforme a la doctrina de los actos propios, la demandada debe soportar que el plazo de prescripción de la acción ordinaria en que se convirtió la ejecutiva que emana del laudo arbitral, se contabilice desde que finalizó la tramitación de su fallido recurso de apelación el 13 de octubre de 2014.



Décimo: Que de acuerdo a lo razonado y teniendo presente que la Corporación Sanatorio Alemán S.A. fue notificada de la demanda el 11 de octubre de 2019 y que la Clínica de la Mujer Sanatorio Alemán S.A. lo fue el 8 de noviembre de 2019, cabe desechar la excepción de prescripción respecto a la primera y acogerla en lo que concierne a la Clínica de la Mujer por haber transcurrido, en este último caso, más de cinco años entre la fecha en que quedó firme el laudo arbitral y la notificación de la demanda de cobro de pesos.

Por estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil SE RESUELVE:

I.-Que se revoca, sin costas, la sentencia apelada, dictada el nueve de septiembre de dos mil veintidós en los autos Rol C-3068-2019, seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, sólo en cuanto se rechazó la excepción de prescripción opuesta por la Clínica de la Mujer Sanatorio Alemán S.A. y en su lugar se declara que dicha excepción queda acogida y consecuentemente se rechaza la demanda a su respecto;

II.-Que se confirma, sin costas y en lo demás apelado, la referida sentencia definitiva.

En lo que concierne al resolutivo I de esta sentencia, acordada con el voto en contra de la ministra Nancy Bluck Bahamondes quien estuvo por confirmar el fallo en alzada en todas sus partes, teniendo únicamente presente, en lo que se refiere a la excepción de prescripción opuesta por las demandadas, que el plazo de dicha prescripción se interrumpe con la sola presentación de la demanda, lo que ocurrió el 18 de julio de 2019, de manera que a esa fecha no habían transcurrido cinco años desde que el laudo arbitral quedó firme.

Para sustentar lo anterior, dicha ministra tiene presente las siguientes consideraciones:

1.- Que la prescripción es una institución que informa todo nuestro ordenamiento jurídico y que persigue proporcionar estabilidad y seguridad jurídica en las relaciones que se generan entre las personas



para que no se prolonguen indefinidamente en el tiempo. Desde el otro extremo, constituye una verdadera sanción para el sujeto que no ejerce una acción o no reclama un derecho en un tiempo determinado, vale decir, se sanciona la inactividad del titular;

2.- Que el artículo 2518 del Código Civil indica claramente que la prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya sea natural o civilmente y que “Se interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 2503”.

3.- Que tal y como lo indica la Excm. Corte Suprema en autos Rol N°133.780-2020, teniendo presente el distingo entre el efecto procesal y el sustantivo de la demanda, no parece adecuado exigir para la interrupción de la prescripción la notificación de la demanda, la que si bien debe dotarse de consecuencias en el ámbito estricto del derecho procesal al configurar el inicio del procedimiento, no cabría estimarla un elemento constitutivo de la interrupción civil, lo que se refuerza si se considera que la notificación no constituye un acto dentro de la esfera única del demandante, sino que su realización queda supeditada a los vaivenes del acto procesal del receptor y la no siempre fácil ubicación del demandado;

4.-Que, de otra parte, resulta necesario no perder de vista que el fundamento de la prescripción estriba en sancionar la desidia o negligencia del demandante en la protección de sus derechos o en el reclamo de los mismos, y no cabe duda que la presentación de la demanda constituye una categórica manifestación de voluntad en orden a hacer efectivo un derecho mediante la acción respectiva;

5.-Que lo anteriormente razonado, lleva a quien disiente a interpretar armónicamente los artículos 2503 y 2518 del Código Civil, entendiendo que la mera presentación de la demanda interrumpe la prescripción, siendo la notificación de la misma una condición para alegarla, debiendo circunscribirse su efecto al ámbito procesal, pero no como un elemento constitutivo de la interrupción de la prescripción.

Redacción de la ministra Nancy Bluck Bahamondes.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MTCGXJFQNV

Regístrese y oportunamente devuélvase.
N°Civil-3068-2022.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MTCGXJFQNV

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Nancy Aurora Bluck B., Waldemar Augusto Koch S. y Ministra Suplente Claudia Andrea Vilches T. Concepcion, veinte de noviembre de dos mil veintitres.

En Concepcion, a veinte de noviembre de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MTCGXJFQNV